



Unión Nacional de Trabajadores

UNT: por un Nuevo Pacto Social, Incluyente y Democrático

A partir del cómputo de resultados dados a conocer por el IFE, podemos observar que la contienda electoral se caracterizó por el voto de castigo al PAN y la consecuente debacle electoral del partido gobernante, el avance de la izquierda que logró remontar su desventaja inicial para situarse en el segundo sitio de las preferencias electorales y una controvertida victoria para el PRI.

El debate sobre el proceso electoral en curso, está vinculado con irregularidades de todas las fuerzas políticas como el dispendio y el rebase del tope establecido en los gastos de campaña; la triangulación de recursos a través de asociaciones civiles y empresas; el empleo de dinero de dudosa procedencia; el manejo de la mercadotecnia para la construcción de imagen y posicionamiento de los candidatos entre los electores; el uso electoral de las encuestas, cuya seriedad y profesionalismo ha sido severamente cuestionada y, finalmente, por las diversas modalidades de compra, inducción y coacción de los votos, procedimientos a menudo asociados con la desviación o condicionamiento de los recursos provenientes de programas sociales.

Las condiciones en que se desarrolló la contienda electoral pusieron en evidencia, el desgaste del régimen político y **la crisis de representatividad** de los partidos políticos. La corrupción, además de la ausencia de ética y de valores cívicos que se manifestaron en las distintas etapas del proceso, **hace indispensable que los ciudadanos rompamos este círculo vicioso que tanto daña a la democracia.**

De mantenerse esta inercia se corre el riesgo de que el próximo gobierno del PRI, debilitado por los costos políticos de una contienda electoral desaseada, encabece un régimen autoritario y de exclusión sometido a los intereses de los poderes fácticos para, con el apoyo de fuerzas como el PVEM, el PAN y el PANAL, cuya gestión podría estar determinada por la eventual aprobación de las cuatro reformas estructurales de carácter neoliberal de la agenda promovida por organizaciones patronales como la COPARMEX y la CONCAMIN.

En este contexto, las tensiones originadas por la acción del narcotráfico y por la crisis económica, fortalecerían la tendencia a continuar aplicando severas medidas de ajuste económico y a preservar el autoritarismo, e incluso, a intensificar la militarización de amplias franjas del territorio nacional con la consecuente vulneración de los derechos civiles y sociales de todo tipo.

Este escenario podría verse favorecido si el bloque de fuerzas hegemónico logra marginar y aislar políticamente a la izquierda, por lo que un aspecto crucial será la capacidad de la misma para definir una estrategia que le permita salir de sus contradicciones internas y de la lógica del conflicto postelectoral, con salidas democráticas y viables para el país con una mayor y mejor articulación con los movimientos sociales y la sociedad en su conjunto.

Es por ello que, en esta perspectiva, en la **Unión Nacional de Trabajadores (UNT)** consideramos necesario **ir a las causas de fondo que explican la polarización social** que envuelve al actual proceso electoral y que reflejan, en última instancia, la crisis de representatividad de los partidos políticos así como la creciente disfuncionalidad y anacronismo de instituciones como el presidencialismo autoritario, el aparato de impartición de justicia y el corporativismo de Estado.

La forma en que se desarrolló la contienda electoral puso de manifiesto, por otra parte, la debilidad de un régimen de partidos que permite comportamientos contrarios a la democracia como la inducción y compra de votos, la manipulación de las encuestas, el uso de recursos públicos en favor de candidatos, lo que hace urgente legislar para corregir los vacíos legales que impiden la anulación de las elecciones cuando se incurre en este tipo de prácticas. Pero el problema no se agota en el ámbito electoral, también expresa las notorias limitaciones de la democracia representativa mexicana y la necesidad de incluir en las leyes figuras vinculadas con la democracia directa y con la democracia participativa, como la revocación del mandato o Consejo Económico y Social.

Vale la pena considerar, por otra parte, que el condicionamiento o compra de votos es un fenómeno que se hace posible por el drástico descenso de los niveles de bienestar de la población que convierte a numerosos ciudadanos en pasto fértil para la manipulación electoral y por la persistencia de un sistema de control corporativo que inhibe la organización autónoma de los ciudadanos y favorece la inducción del voto a partir del condicionamiento a distintas prestaciones u oportunidades de acceso a puestos de trabajo o favores de diversa índole.

El asumir medidas para erradicar el control corporativo de Estado y mejorar los niveles de bienestar de los trabajadores del campo y la ciudad es, en consecuencia, otra de las grandes prioridades de una agenda democrática para prevenir este tipo de procedimientos y ampliar la garantía de procesos electorales equitativos y transparentes.

A las organizaciones sociales democráticas como la **UNT**, nos corresponde actuar en consecuencia y con gran responsabilidad para **conjurar los riesgos derivados del desenlace de la contienda electoral aun en curso**, desarrollando un conjunto de acciones políticas para **recuperar la iniciativa**, promover un proceso de transformación del conjunto de instituciones del Estado y un cambio de rumbo en la conducción de la economía, con base en un **nuevo pacto social incluyente y democrático**.

Estos son los objetivos centrales del Polo Social que estamos construyendo y que deberá actuar en dos direcciones simultáneas y complementarias: la primera consistirá en **presentar un frente común con alternativas reales ante la nueva oleada de reformas estructurales** neoliberales y, la segunda vía es desarrollar un trabajo entre los distintos actores políticos y sociales con el propósito de promover la idea de **construir un gran acuerdo nacional diferente al neoliberalismo**, para la transformación económica, política y social de nuestra nación.

La configuración del Congreso de la Unión en donde ningún partido obtuvo la mayoría por el voto diferenciado de los ciudadanos, aunado al descontento creciente causado por la crisis económica y la falta de oportunidades de desarrollo y bienestar social, obligan a todos los actores políticos y sociales a **replantear las formas de hacer política y establecer una relación distinta entre el gobierno y la sociedad**. Parte fundamental de ese cambio es integrar estructuralmente a la democracia representativa, instancias de democracia directa y de democracia participativa.

Pero, para avanzar en esta dirección una tarea insoslayable es **recuperar la certidumbre respecto del Proceso Electoral**. Las impugnaciones y denuncias que se suscitaron a lo largo del mismo, que han sido documentados por los partidos y ciudadanos deben ser debidamente desahogadas por las autoridades electorales, por lo que en el proceso de calificación de la elección deben examinarse escrupulosamente los gastos, el origen del dinero y los topes de campaña, evaluar el papel de los medios electrónicos e investigar a fondo los casos de coacción, inducción y compra del voto.

La UNT demanda de todos los partidos políticos y candidatos honrar el Compromiso de Civilidad que signaron, así como la voluntad política necesaria para agotar todos los recursos legales y pacíficos para limpiar la elección. Exige asimismo que las autoridades competentes se conduzcan bajo los principios de transparencia e imparcialidad evitando en todo momento la impunidad. Si se demuestra la comisión de delitos en el contexto del proceso electoral, los responsables deben ser ejemplarmente castigados.

Los problemas que arrastra nuestro país desde hace años como consecuencia del crecimiento económico mediocre, el descenso sostenido de los índices de bienestar de la población, la inseguridad o la generalización del desempleo abierto y la informalidad rebasan con mucho a la capacidad de respuesta de una clase gobernante atrapada por los conflictos partidarios y por su subordinación ante los intereses de los grandes centros de poder económico. **En la UNT hemos acordado los proyectos y propuestas necesarios para revertir la postración de la nación desde una perspectiva social** a partir de la construcción de una democracia participativa y de la articulación de un conjunto de políticas públicas que erradiquen la pobreza, reviertan la desigualdad social, estimulen el desarrollo, generen empleos formales, que garanticen la libertad sindical, la contratación colectiva auténtica el respeto y vigencia de los derechos humanos; en suma un nuevo régimen político asociado con un modelo de desarrollo orientado a mejorar significativamente la calidad de vida y de trabajo de los mexicanos.

Para la UNT y el conjunto de las fuerzas sociales, el reto consiste en poner en juego toda su capacidad para **actuar política y socialmente a fin de hacer valer nuestras propuestas de cambio social**, construyendo contrapesos políticos, ampliando, los espacios de participación social y constituyendo una fuerza social propia con plena autonomía.

Se trata de promover un movimiento social convergente y plural que promueva la transformación del régimen económico, político y social del país; que impulse la democratización de los medios de comunicación y que deberá contar con la capacidad para incidir en los centros de decisión política y en los gobiernos, para que asuman la agenda social del cambio democrático y el desarrollo con justicia y equidad.

En la UNT estamos convencidos que sólo con estos cambios será posible contar con instrumentos e instituciones que garanticen una **governabilidad democrática con la amplia participación de los ciudadanos y una agenda social** que estén presentes en el Programa de Gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo y en las prioridades del Poder Legislativo. Es además, la vía democrática para alejarnos de todo intento de imposición y terminar de una vez por todas las formas autoritarias y excluyentes de gobierno que padecemos, así que nos pronunciamos por el cambio de rumbo de la nación

En virtud de lo anterior, proponemos nuestros siguientes ejes de lucha:

1. Impulsar la agenda social para el cambio del rumbo económico, político y social así como el nuevo pacto social. (Por una Reforma Social y Democrática del Estado: Nuevo Régimen Fiscal Progresivo; Reforma de las Telecomunicaciones y medios audiovisuales; Reforma de la Educación, Ciencia y Tecnología; Fortalecimiento del sistema de seguridad social del país; Rescate y reactivación inmediata del Campo; Reforma Laboral Democrática, Productiva y de los Salarios; Consejo Económico y Social; Ley de Participación Ciudadana; Autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; Política Aeronáutica de Estado).
2. Construir y defender propuestas alternativas sobre las 4 reformas estructurales planteadas por Enrique Peña Nieto.
3. Demandar la solución a los conflictos sociales pendientes, particularmente a los que afectan a los electricistas, mineros, compañeros del MOCRI-CNPA, UNTYPP y trabajadores de Mexicana de Aviación, entre otros.
4. Demandamos el pleno ejercicio de la libertad sindical, la Contratación Colectiva auténtica y la anulación de los nuevos criterios procesales publicada en el Boletín Laboral del 27 de octubre de 2011 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
5. Detener cualquier reforma que busque el fortalecimiento del presidencialismo autoritario o que socave la pluralidad del poder legislativo.
6. Demandar la publicación de la Ley General de Atención a Víctimas, mantener nuestra oposición a la Ley de Seguridad Nacional y combatir la tendencia a la criminalización de la protesta social. Exigir la liberación de los presos políticos.
7. Con base a lo dispuesto en el Artículo Primero de nuestra Carta Magna nos oponemos a cualquier reforma que socave o menoscabe los derechos ciudadanos, en especial los laborales. Integrar para este propósito un equipo de juristas que pueda ubicar las líneas de defensa partiendo de los acuerdos internacionales y de lo dispuesto por la legislación mexicana.
8. Impulsar una reforma de la Ley de Telecomunicaciones y Medios Audiovisuales en la lógica de acotar el poder del duopolio televisivo, diversificar la oferta de contenidos abriendo los canales televisivos a las instituciones de educación, investigación, ciencia, cultura y organizaciones sociales, y garantizar el acceso de la población a los servicios relacionados con la Banda Ancha y el Internet. Oponernos a cualquier tipo de censura en el Internet.
9. Combate a la carestía que implica, entre otras medidas, impulsar un programa emergente de producción de alimentos básicos, fortalecer el fondo para la prevención de desastres naturales y la aplicación inmediata de estos recursos a las zonas más afectadas, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el control de los precios de los artículos de primera necesidad, entre otros.

Para concretar estas propuestas convocamos a la construcción de un amplio Polo Social que articule a los ciudadanos y referentes involucrados en la transformación y democratización de nuestra nación.

Por la unidad democrática de los trabajadores